

Para evitar el descarrilamiento de España

El domingo 18 de enero ha ocurrido un gravísimo descarrilamiento de un tren Iryo de alta velocidad que circulaba de Málaga a Madrid en el municipio cordobés de Adamúz que provocó, a su vez, el choque frontal de otro tren Alvia que circulaba en dirección contraria desde Madrid a Huelva. El resultado han sido 45 muertos, entre los que está el maquinista del Alvia, otros tantos heridos y un enorme impacto sobre la sociedad española. Además, ha suscitado lógicas dudas de confianza en los españoles y turistas que viajamos en el ferrocarril (el turismo representa el 14% del PIB nacional) y ya está causando perjuicios sobre contratos de empresas españolas en el extranjero (se ha suspendido una negociación sobre la prórroga de gestión del tren Medina- La Meca). Por ello, el descarrilamiento debe ser aclarado cuanto antes y, Sánchez debe cesar al soberbio ministro Puente y a los directivos del equipo de alta velocidad por su manifiesta incompetencia y tal vez corrupción. En efecto, existe una evidente responsabilidad política porque hay serios indicios de haber sido la causa del descarrilamiento una vía que se rompe (frente a la pretensión inicial del ministro de señalar las ruedas del tren Iryo) y porque ADIF no atendió las constantes comunicaciones (denuncias) de los maquinistas para que las vías fueran mantenidas diligentemente, con el gasto necesario, ya que los vagones vibraban en exceso. La investigación y los tribunales determinarán la causa, los culpables y las responsabilidades jurídicas en su momento.

Mientras tanto, el ministro de transporte debe ser cesado. Puente destina muchas horas de su jornada para criticar de forma despiadada en las redes sociales a quien considera sus enemigos políticos, pero no se le ha visto especialmente preocupado en mejorar la seguridad de la red de transporte ferroviario o de las carreteras españolas. El hecho es que ha sido reprobado en las Cortes en tres ocasiones por su falta de respuesta al incremento anual de accidentes ferroviarios (más de 140 durante 2025) y de escasa inversión en su mantenimiento. Informan que Francia destina al mantenimiento de su red de tren de alta velocidad 5.000 M. € al año mientras que España gasta, salvo inversiones excepcionales, 500 M € para una red de mayor longitud. Disponemos de recursos públicos suficientes para atender la seguridad ferroviaria requerida porque, junto a los ingresos fiscales, las nuevas empresas IRYO y OUIGO pagan los cánones por el uso de las vías.

Pero la situación de desorden presupuestario del Estado es muy grave, condiciona toda la actividad del gobierno y la convierte en incomprensible. Todo nace de la debilidad parlamentaria del gobierno de Sánchez que quiere seguir en la Moncloa a toda costa y ha quedado convertido en una marioneta de los separatistas catalanes y a realizar cesiones y pagos encubiertos a Cataluña que llevan a desconocer, además, la verdadera situación financiera del Estado. Existe el dato seguro de la masa creciente de la Deuda Pública que

supera 1,7 BILLONES de EUROS en 2025 aunque puede ser mayor porque se desconoce si existen facturas” de cajón”.

Sánchez está convirtiendo a España en un país desconocido, cada vez más complicado y opaco, que debe volver a la normalidad para no descarrilar como Nación y como Estado. Ello exige una gestión eficaz con personas preparadas, capaces de enderezar la dirección alocada de este gobierno y actuar dando transparencia ante el poder legislativo, ante la AIREF y ante los organismos europeos. La ley de Presupuestos Generales debe ser la principal ley del año que indica el sentido de la política económica del gobierno, concreta los gastos, prevé los ingresos y queda sometida a la aprobación y control del poder legislativo. España necesita recuperar el camino de la normalidad para no descarrilar y esto requiere unas elecciones generales que señalen la puerta de salida al nefasto gobierno de coalición social comunista de Sánchez.

Carlos Entrena Palomero
Presidente del Club Liberal Español